

## Un reto global



# 42 ciudades se alían contra plataformas como Uber y Airbnb

► En una declaración, se comprometen a actuar como lobi y compartir estrategias

► Uno de los objetivos es evitar cualquier actividad sin permiso municipal

ERNEST ALÓS  
BARCELONA

Reunidas en Barcelona, 42 ciudades de todo el mundo han formado una alianza para coordinarse en su pulso contra plataformas digitales de servicios de transporte, como Uber, de reparto, como Glovo, o de hostelería, como Airbnb. La declaración que han firmado en el marco de la Sharing Cities Summit de Barcelona que finalizó ayer junto con el resto de eventos asociados al Smart City Expo World Congress, es tanto de declaración de principios como un programa de actuación, dentro de los límites de las competencias municipales.

Se trata de hacer lobi ante la Comisión Europea para que se obligue a las plataformas de alquiler vacacional a abrir sus datos, poner en común las negociaciones con cada em-



ALBERT BERTRAN

►► Un vehículo de Uber, en Barcelona.

presa para conseguir que cada concesión que arranque una ciudad lo exijan también el resto, creando así una plataforma mínima de negociación, compartir las experiencias de inspección y control, garantizar los derechos laborales de los trabajado-

res y hacer que las plataformas «sean responsables de sus infracciones». También un objetivo común más difícil de cumplir: intentar imponer el criterio de que el desembarco de una nueva plataforma en una ciudad deba contar con un permiso de

esta (aparte de algo que debería ser evidente pero no siempre lo es, que cumpla con el marco legal local).

Las tres primeras cumbres de Sharing Cities las han acogido ciudades que están sufriendo de forma especial los impactos negativos de estas

nuevas formas de colaboración (o de comercio), en forma de encarecimiento del mercado de alquiler, saturación turística o degradación de condiciones laborales. Nueva York, Ámsterdam y ahora Barcelona. En la tercera se ha empezado a concretar los tanteos de la anteriores, con un diagnóstico y un trabajo teórico previo encargado al Dimmons Research Group de la UOC dirigido por Mayo Fuster y que inspira la declaración.

**QUÉ ES COLABORATIVO Y QUÉ NO** // Básicamente, se trata de diferenciar entre la verdadera economía colaborativa, «con modelos socialmente responsables y que impulsan la innovación y el crecimiento», que las ciudades se comprometen a potenciar, y las grandes plataformas tecnológicas de servicios «muy agresivas, que intentan esquivar las regulaciones y tienen claros impactos negativos», a quienes se comprometen a acotar el campo de juego. Los retos son, dice Fuster, diferenciar entre «amateur y profesional, trabajador y usuario, plataforma de intercambio de información y plataforma de servicios de transporte, turismo o reparto».

«Estamos a favor de la innovación. Pero la desregulación no tiene nada de innovador: no nos ha de temblar el pulso ante actividades que tienen un impacto negativo en el mercado de la vivienda o sobre un sector regulado como el del taxi, sostiene Álvaro Porro, comisionado de Economía Colaborativa del Ayuntamiento de Barcelona.

Para que el trabajo de lobi sea operativo, Barcelona, que está tomando junto con Ámsterdam un papel de impulsora, creará una oficina coordinadora de este grupo de ciudades. ≡

Estamos viviendo un cambio tecnológico vertiginoso. Inteligencia artificial, robots, móviles de última generación. Unos dispositivos que no actúan de manera simplemente externa sobre la condición humana, sino que la modifican. Lo que no está claro, es verdad, es en qué sentido lo harán. Si abrirán inesperados caminos de libertad o si engendrarán nuevas variantes distópicas de dependencia y vigilancia. Si servirán para reforzar a un puñado de corporaciones ávidas de beneficios, o si darán pie a formas más cooperativas de producir y consumir.

El debate sobre las plataformas digitales que prestan servicios debe situarse en este contexto. Su presencia en el devenir cotidiano de las ciudades es cada vez mayor. Escoger un medio de transporte para desplazarse, encargar comida a domicilio, buscar alojamiento. Decenas de actividades que pasan a través de plataformas digitales e impactan en la vida de las grandes metrópolis.

A menudo, la economía que opera a través de plataformas se ha definido como «colaborativa». Este calificativo, vinculado al intercambio de información que dichos dispositivos propician, tiene sin duda connota-

## Análisis

Gerardo Pisarello

PRIMER TENIENTE DE ALCALDÍA DE BARCELONA



## Colaborar, pero de verdad

La economía colaborativa puede aportar innovación y progreso, pero hay que regular sus posibles impactos negativos

ciones favorables. Pero hay que analizar el adjetivo con cuidado. No es lo mismo compartir información sin ánimo de lucro que buscando obtener beneficios. Ni hacerlo de manera transparente que aprovechar las tecnologías digitales para eludir controles fiscales o laborales.

Esta realidad coloca a las admi-

nistraciones públicas, empezando por las municipales, ante un desafío: cómo aprovechar las oportunidades de innovación y cooperación que las plataformas digitales traen consigo, y establecer, al mismo tiempo, reglas claras que permitan conjurar sus impactos negativos.

En Barcelona tenemos buenos ejemplos de ambas cosas. Como gobierno, no hemos dudado en advertir con firmeza a las grandes plataformas digitales de que no todo vale. Así, hemos llegado a imponer multas severas a AirBnB por publicitar pisos turísticos que no contaban con la debida licencia e implicaban una disminución inaceptable de vivienda para uso residencial. También hemos defendido la necesidad de una

regulación que impida que servicios como Uber o Cabify introduzcan nuevas formas de precarización laboral o de competencia desleal con el sector del taxi, del que viven miles de familias.

### Innovación positiva

Al mismo tiempo, hemos defendido con orgullo numerosas iniciativas de innovación digital colaborativa en la que nuestra ciudad es pionera. Un reciente estudio de la Universitat Oberta de Catalunya recoge más de un centenar de proyectos radicados en Barcelona que utilizan datos abiertos y que actúan con responsabilidad social y ambiental. Ejemplo de ello es la comunidad wikipedista catalana, una de las iniciativas colaborativas más activas del mundo. O Som Mobilitat, un proyecto cooperativo para intercambio de coches. O Moodle, una empresa que acaba de abrir una oficina en Barcelona para impulsar su plataforma pedagógica de código abierto.

Estas iniciativas, impensables sin la revolución digital de los últimos años, merecen todo el apoyo. El reto que tenemos por delante, como decía, es encontrar el equilibrio entre el impulso decidido de lo que impli-

que innovación y progreso y la regulación de lo que pueda tener impactos negativos. Con ese fin, Barcelona ha decidido aprovechar su papel de hub tecnológico de vanguardia para acoger un congreso de relevancia internacional: la Cumbre de Ciudades Colaborativas (Sharing Cities Summit). Allí, 42 grandes metrópolis de todo el mundo –desde París a Nueva York, pasando por Sao Paulo, Madrid, Ámsterdam o Milán– hemos acordado algunos principios para identificar lo que entendemos por economías realmente colaborativas: la transparencia, el uso de tecnología abierta, el respeto por los derechos de los usuarios, el cumplimiento, siempre, de las obligaciones laborales y fiscales.

Esta iniciativa permitirá tejer una suerte de «sindicalismo municipalista» para impulsar buenas prácticas globales pero también para negociar, de manera coordinada, con grandes plataformas como Uber, AirBnB o Glovo. No se había hecho antes y es más necesario que nunca. Para que los cambios tecnológicos no sean vistos como una amenaza distópica, y para que lo que es el producto de una creación colectiva de la humanidad redunde en beneficio de todos y no de un pequeño grupo privilegiado. ≡